

Declaracion del Obispo John Wester de Salt Lake City
Presidente, Comité sobre Comunicaciones de USCCB
Abril 22, 2013

Primero quiero señalar que nuestra nación ha gastado miles de millones de dólares (algunos estiman hasta 150 mil millones de dólares) en tácticas de cumplimiento de leyes de inmigración durante los últimos diez años, y aun así la población indocumentada ha aumentado de 6 a 7 millones a 11 millones desde el año 2000. Así que nos agrada que el Congreso este tomando un acercamiento completo que aumentaría las vías legales para que los inmigrantes puedan entrar a nuestro país de manera segura.

Nos preocupan las acciones en la frontera que deben ser implementadas antes de que personas indocumentadas puedan aplicar para una residencia permanente. Cualquier estrategia de implementación de medidas en la frontera, y del sistema e-verify deben incluir componentes que protejan los derechos humanos básicos y prevenir muertes en el desierto fronterizo. También nos preocupan estipulaciones que incrementarían penalidades criminales para personas indocumentadas, incluyendo la expansión de Operation Streamline, la cual procesa a inmigrantes como criminales. Es erróneo ver a inmigrantes que vienen a trabajar y a mantener a sus familias como criminales.

También creemos que si estas metas de seguridad prueban ser imposibles de alcanzar, los indocumentados se quedarían sin alcanzar la residencia permanente de manera indefinida, creando una subclase permanente. Las iniciativas de cumplimiento de leyes y la habilidad de ajustar un estatus permanente deben ser desconectadas, para que todos los aspectos de la propuesta avancen simultáneamente. De otra manera, el tema de si esos inmigrantes puedan ajustar sus situaciones migratorias continuará siendo un tema de división política en los años venideros.

Quiero señalar que la propuesta no aborda la raíz de las causas de la migración, un elemento importante de la posición de la iglesia. Como actor global, la iglesia testifica de primera mano porque los individuos emigran—para escapar de la pobreza y la persecución. Estos factores que obligan a muchos a migrar deben ser parte del debate. En vez de construir barreras fronterizas, debemos examinar nuestras políticas económicas y ajustarlas para que trabajos con salarios justos no sean eliminados en las comunidades donde muchos emigran. Las personas tienen derecho a permanecer en sus hogares y vivir dignamente. Esta es la respuesta compasiva y de largo alcance al reto de la migración irregular.

Como presidente del Comité de Comunicaciones, también quiero decir que los católicos apoyan a los obispos en este tema importante de la inmigración. Emitimos una encuesta el viernes, conducida por el Tarrance Group, que muestra que el 77 por ciento de los Católicos—de todos los sectores políticos—apoyan un camino a la ciudadanía. Hay más detalles interesantes de la encuesta.

Finalmente, exhorto a todos los lados a conducir el debate migratorio en una manera civil y respetuosa. Muy frecuentemente en debates previos, los inmigrantes han sido deshumanizados por la retórica en el debate, llamándolos “ilegales” y otros términos. Como nación, estamos

mejorando en esta área, pero poner etiquetas no tiene lugar en el dialogo político de nuestra gran nación.